

TOCA DE APELACIÓN NÚMERO:
AP-061/2023-P-2

RECURRENTE: DIRECTOR GENERAL, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS Y SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, TODOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO DE ORIGEN.

MAGISTRADO PONENTE: MTRO. RURICO DOMÍNGUEZ MAYO.

VILLAHERMOSA, TABASCO. ACUERDO DE LA XXXVIII SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

V I S T O S.- Para resolver los autos del toca del Recurso de Apelación número **AP-061/2023-P-2**, interpuesto por el Director general, Encargada del Despacho de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas y Subdirector de Asuntos Jurídicos, todos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, autoridades demandadas en el juicio de origen, en contra de la **sentencia definitiva** de fecha **quince de marzo de dos mil veintidós**¹, dictada por la **Primera** Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, dentro del juicio contencioso administrativo número **381/2021-S-1**, y,

R E S U L T A N D O

1. Por escrito depositado en el buzón Institucional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, el **diecinueve de agosto de dos mil veintiuno**, la ciudadana [REDACTED], promovió juicio contencioso administrativo en contra del Director General, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Director de Prestaciones Socioeconómicas, todos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, de quienes reclamó, **literalmente**, lo siguiente:

¹ Cabe aclarar, que por error involuntario la Primera Sala Unitaria de este tribunal, asentó como fecha quince de marzo de dos mil veintidós, cuando lo correcto es **quince de marzo de dos mil veintitrés**.

Del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, encargado del despacho de la Unidad de Apoyo Jurídico del citado Instituto.

a) La instrucción dada para la emisión del oficio [REDACTED], folio [REDACTED], de fecha 30 de julio de 2021, signado por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Licenciado [REDACTED], encargado del despacho de la Unidad de Apoyo Jurídico del citado Instituto.

b) La inaplicación en mi perjuicio de los artículos sexto y noveno transitorio de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, publicada el 31 de diciembre de 2015 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, en el Decreto 294, y así como del **artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco**.

c) La inaplicación en mi perjuicio de lo dispuesto por los artículos 38, 52 y 53 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco de fecha 1 de agosto de 1984, publicada en el suplemento el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con número 4371.

d) La incorrecta aplicación en mi perjuicio que se pretende de los numerales 66 y 86 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que sirve de ilegal fundamento a las demandadas para negar a la suscrita la pensión por jubilación que me corresponde.

Del Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, encargado del despacho de la Unidad de Apoyo Jurídico del citado Instituto.

a) El contenido y firma del oficio [REDACTED], folio [REDACTED], de fecha 30 de julio de 2021, signado por el señalado Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Licenciado [REDACTED], encargado del despacho de la Unidad de Apoyo Jurídico del citado Instituto.

b) La inaplicación en mi perjuicio de los artículos sexto y noveno transitorio de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, publicada el 31 de diciembre de 2015 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, en el Decreto 294, y el **cuarto transitorio del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco**.

c) La inaplicación en mi perjuicio de lo dispuesto por los artículos 38, 52, y 53 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco de fecha 1 de agosto de 1984, publicada en el suplemento del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con número 4371.

d) La incorrecta aplicación en mi perjuicio que se pretende de los numerales 66 y 86 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que sirve de ilegal fundamento a las demandadas para negar al suscrito la pensión por jubilación que me corresponde.

Del Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

a) El contenido del oficio [REDACTED] de fecha 03 de mayo de 2021, signado por el Director de

Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y dirigido al Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico ISSET(sic), que determina INOPORTUNA la petición de la suscrita de la Pensión(sic) por Jubilación(sic) que me corresponde.

b) La inaplicación en mi perjuicio de los artículos sexto y noveno transitorio de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, publicada el 31 de diciembre de 2015 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, en el Decreto 294, y el **cuarto transitorio del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco**.

c) La inaplicación en mi perjuicio de lo dispuesto por los artículos 38, 52 y 53 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco de fecha 1 de agosto de 1984, publicada en el suplemento del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco con número 4371.

d) La incorrecta aplicación en mi perjuicio que se pretende de los numerales 66 y 86 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que sirve de ilegal fundamento a las demandadas para negar al suscrito la pensión por jubilación que me corresponde”.

2. Por auto de fecha **dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno**, la **Primera** Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, a quien tocó conocer por turno del asunto, radicándolo bajo el número de expediente **381/2021-S-1**, admitió a trámite la demanda en los términos propuestos, ordenando correr traslado a las autoridades demandadas para que formulara su contestación dentro del término legal, y admitió las pruebas ofrecidas por la parte actora.

3. Por acuerdo de **veintiuno de enero de dos mil veintidós**, la Sala de origen, tuvo a las autoridades demandadas, dando contestación a la demanda, oponiendo excepciones y defensas que estimaron pertinentes, por lo que se ordenó correr traslado a la parte actora, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera², asimismo, admitió las pruebas ofrecidas por las autoridades enjuiciadas, finalmente tuvo a la parte actora, exhibiendo copias certificadas de los oficios [REDACTED] y [REDACTED], expedidos por el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, mismos que recibió al encontrarse relacionados con la prueba admitida en el punto tercero, señalada con el inciso 8) del diverso auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

4. Seguida la secuela procesal del juicio, con fecha **veintiocho de septiembre de dos mil veintidós**, se celebró la audiencia de desahogo de

² Mediante auto **cinco de agosto de dos mil veintidós**, se tuvo a la parte actora, desahogando la vista concedida, respecto de la contestación de demanda por parte de las autoridades demandadas.

pruebas, así como la de ley, y mediante **sentencia definitiva** dictada el **quince de marzo de dos mil veintitrés**, la Sala instructora, resolvió de conformidad con los siguientes puntos resolutivos:

“RESUELVE

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio respecto del Director General y Director de Prestaciones Socioeconómicas, todos del Instituto de Seguridad del Estado de Tabasco, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. -----

SEGUNDO. La accionante [REDACTED], demostró la ilegalidad del acto que reclamó al Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, quien no justificó sus defensas conforme a las consideraciones precisadas en el considerando Séptimo de esta sentencia. -----

TERCERO.- Se declara la NULIDAD del oficio número [REDACTED], de fecha treinta [30] de julio del dos mil veintiuno [2021], emitido por Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, debido a que el actuar de la responsable carece de la debida fundamentación o motivación que todo acto de autoridad debe contener. -----

CUARTO. Se CONDENA al Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para que en el plazo de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, deje sin efecto el oficio número [REDACTED], de fecha treinta [30] de julio del dos mil veintiuno [2021], y proceda a realizar pago a la ciudadana [REDACTED], y proceda a realizar los trámites para el otorgamiento de la pensión a la accionante [REDACTED], que por derecho le corresponde, conforme a las consideraciones precisadas en el considerando Sexto de esta sentencia. -----

5. Inconforme con el fallo antes referido, mediante oficio presentado **el doce de abril de dos mil veintitrés**, el Director General, Encargada del despacho de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas y Subdirector de Asuntos Jurídicos, todos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, autoridades demandadas en el juicio de origen, promovieron recurso de apelación, mismo que fue remitido a la Secretaría General de Acuerdos el **veintitrés de mayo de dos mil veintitrés**.

6. Mediante auto de **veinticinco de mayo de dos mil veintitrés**, el Magistrado Presidente de este tribunal, admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por la autoridad demandada, ordenando correr traslado a la contraparte, para que en un término de cinco días hábiles

manifestara lo que a su derecho conviniera, finalmente, designó al Magistrado titular de la Segunda Ponencia para el efecto de que formulara el proyecto de sentencia correspondiente.

7. En distinto proveído de fecha, se tuvo por **desahogada** la vista concedida a la parte actora, asimismo se tuvo al Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, ofreciendo como prueba superveniente la copia simple de la sentencia de treinta de mayo de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, en el juicio de amparo número 1021/2022-III-5, misma que fue admitida para ser valorada en el momento procesal oportuno, ordenando dar vista a la accionante, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto a la prueba antes citada, por lo que, ordenó que una vez transcurrido el plazo precitado se turnara el expediente al Magistrado Ponente, el cual fue recibido en la citada Ponencia el día **veintiuno de agosto de dos mil veintitrés**, para el efecto que se formulara el proyecto de sentencia respectivo, por lo que habiéndose formulado el mismo, se procede a emitir por este Pleno la presente sentencia:

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL: Este Órgano Colegiado es competente para conocer y resolver del presente **RECURSO DE APELACIÓN**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 111, 171, fracción XXII de la Ley Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, publicada el quince de julio de dos mil diecisiete, en el Suplemento B al Periódico Oficial del Estado, número 7811.

SEGUNDO. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN. Es procedente el recurso de apelación que se resuelve, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 111, fracción **II**, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente³, en virtud que la autoridad demandada ahora recurrente, se inconforma de la **sentencia definitiva** de fecha **quince de marzo de dos mil veintitrés**, dictada por la **Primera** Sala Unitaria de este

³ **Artículo 111.- El recurso de apelación** procederá en contra de:

[...]

II. Sentencias definitivas de las Salas.

[...]"

[Subrayado añadido]

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, dentro del expediente número **381/2021-S-1**.

Así también se desprende de autos (foja 196 del expediente principal), que la sentencia definitiva impugnada le fue notificada a la autoridad demandada el **veintidós de marzo de dos mil veintitrés**, por lo que el término de diez días hábiles para la interposición del recurso de trato, transcurrió del **veinticuatro de marzo al trece de abril de dos mil veintitrés**⁴, siendo que el medio de impugnación fue presentado el **doce de abril de dos mil veintitrés**, por lo cual el recurso se interpuso en tiempo.

TERCERO. SÍNTESIS DE LOS AGRAVIOS DEL RECURSO Y DESAHOGO DE LA VISTA.- En estricta observancia a los principios procesales de exhaustividad y congruencia que rigen las sentencias, conforme a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente, se procede al estudio y resolución de los argumentos de apelación hechos valer por el accionante, a través de los cuales medularmente sostiene:

- Aducen las autoridades recurrentes, que les causa agravio la sentencia recurrida, pues transgrede la esfera jurídica del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, pues al dictar la misma, no analizó correctamente la apreciación e interpretación de las pruebas ofrecidas por sus representadas, por lo tanto, violenta los derechos de dicha institución.
- Esgrimen las recurrentes, que la sentencia definitiva vulnera las garantías individuales del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, esto conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, puesto que, en el fallo combatido se advierte que no fue emitida por los principios de congruencia y exhaustividad, conforme a los artículos 96 y 97 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente.
- De igual forma, manifiestan que la Sala de origen no valoró correctamente la prueba marcada con el inciso **D)** del capítulo de pruebas del oficio de contestación de la demanda, consistente en el oficio [REDACTED] así como su anexo la cédula de historial de cotización de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, en virtud de que, solo se concreta a tener la prueba admitida y desahogada sin realizar el estudio correspondiente, probanza que cuenta con pleno valor probatorio, por haber sido emitido por el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, quien se encuentra investido de una serie de facultades relacionadas con las prestaciones y servicios asistenciales, incluyendo las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores al Servicio del

⁴ Descontándose de dicho cómputo los días veinticinco, veintiséis y treinta y uno de marzo, uno, del uno al nueve de abril de dos mil veintitrés, por corresponder a sábados, domingos y días inhábiles, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente y en el Acuerdo General S-S/005/2023 modificadorio del S-S/001/2023, aprobado por el Pleno de la Sala Superior de este tribunal en la X Sesión Ordinaria celebrada el diez de marzo de dos mil veintitrés.

Estado de Tabasco, además que se vincula con los hechos narrados por la actora, y al ser un documento emitido por una autoridad, se asume que es legal, por lo que, si se hubiera analizado de manera correcta por la Magistrada instructora, se hubiera percatado que a la promovente le es aplicable la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, y no la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada, pues al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no reunía los requisitos previstos en los artículos 52 y 54 de la ley abrogada, para tener derecho a una pensión por jubilación o por vejez, aunado a que en el octavo transitorio de la ley vigente, se estableció que los servidores públicos del Estado, que no contaran con los derechos adquiridos de pensión en términos de la ley anterior, se deberían ajustar a lo dispuesto por la ley vigente.

- Señalan las apelantes, que la determinación de la Sala instructora carece de razón, en cuanto a que le asiste la razón a la parte actora al afirmar que tiene derechos pensionarios en términos de los artículos cuarto, sexto y noveno transitorios del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, toda vez que era la ley que se encontraba vigente cuando ingreso al servicio, de acuerdo a la cual satisfizo los requisitos para acceder a la pensión; esto es así, pues a la fecha en que la accionante ingresó al servicio público Estatal, aún no se generaban los supuestos ni las consecuencias para obtener una pensión, es decir, en esa fecha todavía no había solicitado la pensión de retiro por edad y tiempo cotizado; sino fue hasta la presentación de la solicitud de pensión, mismo que fue el nueve de mayo de dos mil diecinueve, sin embargo, aun cuando la accionante manifieste que la ley que le resultaba aplicable para obtener su pensión es la abrogada ley de seguridad social, pues bajo su vigencia, según lo manifiesta, satisfizo los requisitos para acceder al goce de una pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, eso no implica que por ese evento haya adquirido el derecho a ser pensionada conforme a las disposiciones que regulaban en ese momento, pues si en esa época no solicitó el otorgamiento de su pensión, y por ende, tampoco le fue otorgada, es claro que solo tenía una simple expectativa de derecho de la pensión, es decir, aun no se generaba el supuesto consistente en la solicitud respectiva y menos su consecuencia, como es el otorgamiento de la misma.
- Argumentan las quejas, que es **incongruente e infundada** la interpretación de la Sala de origen, en el sentido, de que la aplicación de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco vigente, transgrede a la parte actora el principio de irretroactividad de la ley, así como que desde su ingreso al servicio público, adquirió un derecho de pensión y éste entro a su patrimonio, por lo que cita las siguientes tesis: “RETROACTIVIDAD DE LA LEY, CÓMO DEBE ENTENDERSE LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL; RETROACTIVIDAD DE LA LEY, ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA. bajo este razonamiento la ley abrogada resulta aplicable a hechos sucedidos con posterioridad a su abrogación, dado que esta consiste en dejar sin efecto un ordenamiento legal, no resultaría lógico que se pudiera regular los hechos posteriores a la extinción de la vigencia, por lo que resulta improcedente el caso concreto la aplicación de la Ley abrogada.
- Que, el derecho fundamental de irretroactividad solo puede ser vulnerado en relación a los derechos adquiridos y no respecto a las expectativas de derecho, mismo que son incongruentes e

infundados los argumentos de las responsables, pues se retoma que conforme a la teoría de norma, puede considerarse una disposición legal que infrinja los principios de irretroactividad y seguridad jurídica en los preceptos legales 14 y 16 constitucionales, además de que no reunía los requisitos de edad y tiempo de cotización, y por ende, no cuenta con un derecho de adquirido, si no únicamente con una expectativa de derecho.

- Además, esgrimen que no resulta improcedente la aplicación de la ley para la procedencia de la pensión, puesto que al no acreditar la existencia de un beneficio en materia de pensión por la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (vigente) a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, esta norma jurídica para poder determinar la procedencia del beneficio solicitado por la accionante, mediante la solicitud de fecha uno de julio de dos mil veintiuno(sic), el último ingreso al servicio público fue en el año dos mil dieciséis(sic), de acuerdo a lo anterior no se actualiza la infracción, conforme al artículo 54 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (abrogada), ya que insiste que no se vulnera los principios previstos en la norma abrogada, si no con posterioridad.
- Afirman que resulta legal la emisión del oficio número [REDACTED], signado por el cual el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, dio respuesta a la parte actora a su solicitud de pensión por vejez(sic), determinando que la misma resultaba improcedente. Lo anterior, pues el derecho para obtener una pensión constituye únicamente una expectativa de derecho, hasta el momento en que se satisfagan los requisitos enunciados por la ley, y reitera, la actora al momento de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, el uno de enero de dos mil dieciséis, no contaba con el derecho adquirido de recibir la pensión que solicitó, pues aún tenía que reunir los requisitos de ley, aunque, al respecto la instructora señale que las normas deben interpretarse a la luz del principio *pro persona*, por encontrarse de por medio el derecho humano a la seguridad social de la promovente, pues se debe tener en cuenta que dicho principio no versa en que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera *so pretexto* de establecer la interpretación más extensiva o amplia que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de “derechos” alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, por tanto, el principio de que se trata no es suficiente para resolver de acuerdo a las pretensiones de la actora.
- Además, manifiestan que se transgrede el artículo 58 último párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (abrogada), ya que impone la obligación de probar sus acciones, pretensiones, hechos, excepciones o defensas a las partes del presente juicio, a su vez no suplirá la deficiencia de la queja en torno a la carga de probar su dicho, siendo que es arbitraria y parcial la sentencia recurrida, al manifestar que existe una deficiencia en los razonamientos o conceptos de nulidad por la parte demandante, de acuerdo a lo anterior, se varió la *litis* teniendo en si la suplencia de la queja en favor de la actora.
- Finalmente, aducen que se varió la *litis* planteada por la actora, pues ésta no solicitó el beneficio de la pensión conforme al artículo 52 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado

de Tabasco (abrogada), introduciendo de manera arbitraria otra cuestión a la controversia planteada por las partes, toda vez que, condenando a las autoridades a algo que no fue materia de *litis*, tal y como lo prevé el precepto 97 fracción V de la Ley de la materia, por ello, solicita se revoque o modifique la resolución recurrida de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés y en su lugar, se dicte una donde se fije la *litis* y sea conforme a derecho.

Por su parte, **la parte actora**, al desahogar la vista en torno al recurso de apelación interpuesto por las autoridades demandadas, manifestó que la resolución impugnada, no vulnera el contenido de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, tampoco transgrede los numerales 88 y 88 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 240, 287, 318, y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicados de manera supletoria a la ley de la materia.

Asimismo, señaló que de la sentencia recurrida, se aprecia un análisis exhaustivo de todas y cada una de las piezas que integran los autos del juicio, por lo tanto, es falso el argumento de las autoridades demandadas, respecto a que la Magistrada instructora omitió otorgar valor probatorio al oficio [REDACTED] de fecha uno de diciembre dos mil veintiuno así como su correspondiente anexo, pues de la misma se aprecia, que la a quo, se pronunció respecto a dicha prueba, por lo tanto, no existe la omisión que se le atribuye a la Sala de origen, por lo tanto, no se vulneran los derechos que aluden las enjuiciadas.

Por lo anterior, adujo que no le asiste la razón a las enjuiciadas, al expresar que se dejó de valorar el oficio antes citado, y que con la valoración que insisten hubieran tenido una sentencia favorable.

Insiste, que la Sala de origen llevo a cabo un análisis exhaustivo respecto a sus derechos adquiridos, y que en esa tesitura determinó que le asiste la razón a su petición, pues se le pretendía aplicar en su perjuicio el artículo 86 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

Finalmente, señaló que es totalmente equívoco que la sentencia combatida transgreda el contenido del artículo 58 último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, toda vez que si probó los hechos de su demanda, y con el caudal probatorio que obra en autos se logró demostrar que tenía conservado sus derechos

conforme a la anterior ley, por lo que una vez, adquirida la edad y los años de servicio estaba en total actitud de obtener la jubilación por pensión que le corresponde, sin que sea cierto que la Sala de origen haya suplido deficiencia de queja alguna, pues no existe la variación de la litis que pretende, por el contrario, desde la presentación de su demanda acompañó los documentos que acreditaron la cotización que tenía al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, y exhibió una documental pública expedida en copia certificada por el propio Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en donde expresamente reconoce los derechos resguardados y adquiridos.

CUARTO.- SÍNTESIS DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- En principio, del análisis que se hace a la **sentencia definitiva** recurrida de fecha **quince de marzo de dos mil veintitrés**, se puede apreciar que la Sala responsable apoyó su decisión, medularmente, en los siguientes razonamientos:

- En principio, indicó que la parte **actora** ofreció como pruebas de su parte: **1)** original del oficio número [REDACTED], de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, expedido por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; **2)** copia del escrito de fecha trece de abril de dos mil veintiuno, dirigido al Director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; **3)** original del oficio número [REDACTED], de fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, expedido por el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; **4)** copia de la resolución emitida en el juicio de amparo indirecto 594/2021-IV; **5)** copia del oficio número [REDACTED], de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, signado por el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; **6)** original de la solicitud de permanencia del régimen de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada, o de transición al Régimen de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco; **7)** copia de las solicitudes vía correos electrónicos dirigidos al Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en la cual solicita copia certificada del oficio [REDACTED] y sus anexos; **8)** copia del oficio [REDACTED] de fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve; **9)** original del acta de nacimiento a nombre de la ciudadana [REDACTED]; **10)** copia de la credencial del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco a nombre de la ciudadana [REDACTED]; **11)** copia de los recibos de nómina de dieciséis al treinta de septiembre de dos mil dieciocho; **12)** copia de la CURP con número de clave [REDACTED], expedida por la Secretaría de Gobernación a nombre de la ciudadana [REDACTED]; **13)** copia de la inscripción al RFC, de fecha uno de noviembre de mil novecientos noventa, expedida por el SAT, a nombre de la ciudadana [REDACTED]; **14)** copia de la credencial para votar, expedida a nombre de la ciudadana [REDACTED], por el Instituto Nacional Electoral; **15)** copia de la cedula de historial de cotización con número de folio 2057, expedida por la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas

del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a nombre de la parte actora; **16)** original de la solicitud de pensión por jubilación, expedida por la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a nombre de la ciudadana [REDACTED]; **17)** original de la solicitud de pensión por jubilación expedida por la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; **18)** copia certificada del oficio [REDACTED]; **19)** la instrumental pública de actuaciones; y **20)** la presuncional legal y humana.

- Por otro lado indicó que las autoridades demandadas ofrecieron por su parte: **1)** Copia certificada del memorándum [REDACTED], de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno; **2)** Copia certificada del historial de cotización de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, expedida a nombre de la ciudadana [REDACTED]; **3)** Copia certificada de la consulta a persona a nombre de [REDACTED], de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno; **4)** Copia certificada del oficio [REDACTED] de tres de mayo de dos mil diecinueve; **5)** la instrumental pública de actuaciones; y **6)** la presuncional legal y humana.
- Luego, determinó que no había lugar al incidente de incompetencia planteado por las autoridades demandadas, por considerar que las enjuiciadas realizaban una equivocada interpretación de los actos y pretensiones que reclamaba la accionante.
- Posteriormente, procedió al análisis de las excepciones planteadas **sine actione agis**, y **falta de acción y derecho**, estimándolas **inoperantes**, al sostener que no tiene contenido procesal y por ende, no constituía defensa alguna.
- Luego, procedió al análisis de las causales de **improcedencia** y **sobreseimiento**, por lo que en términos de los artículos 42 fracción VIII, y 43 fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa, sobreseyó el juicio por cuanto hace al Director General y Director de Prestaciones Socioeconómicas, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, quedando únicamente para continuar con el análisis de las pruebas y fondo del asunto a cargo del Subdirector de Asuntos Jurídicos del citado instituto.
- Seguidamente, procedió al análisis de fondo del asunto, aclarando que la actora reclamó el oficio [REDACTED] de treinta de julio de dos mil veintiuno, a través del cual, se le informó que no tenía derecho a la jubilación de conformidad a los artículos 52 y 53 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, pretendiéndole aplicar los artículos 66 y 86 de la vigente Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, aduciendo en sus agravios que negarle la pensión por jubilación conforme a la nueva disposición, es un acto que transgrede los artículos 1, 2, 4, 16, 17 y 123 Constitucionales, así como el sexto y noveno transitorio de la Ley de Seguridad del Estado de Tabasco, toda vez que no es una expectativa de derechos, sino un derecho adquirido que le otorgó la abrogada ley, pues al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, había cotizado veinte años y a la fecha actual cotizó veinticinco años y seis meses, lo cual le da derecho a ser pensionada, por lo tanto, al negarle ese derecho, está vulnerando el principio de retroactividad de la ley; asimismo señaló que la autoridad omitió el oficio [REDACTED] de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en donde se le reconoció que quedaban garantizados su

conservación de derechos en el régimen de seguridad social de la ley abrogada.

- Por otra parte, el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, señaló que los años cotizados por la parte actora, están reconocidos y sumados a las aportaciones que se cuantifican a la asegurada por el instituto, toda vez que aparece en los registros oficiales del multicitado instituto, que la accionante cuenta con un total de aportaciones de veintiséis años, once meses y quince días, mismo que cumplió hasta el dos mil veintiuno, cuando logró cumplir los veinticinco años que como mínimo requería el artículo 52 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada, y al no cumplir con los requisitos durante la vigencia de la nueva ley, la parte actora debe apegarse al octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, pues la promovente al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no contaba con derechos adquiridos para ninguna de las pensiones previstas en la ley abrogada, menos para una pensión por invalidez, pues no contaba con un dictamen médico que la diagnosticara incapacidad total para laborar, por ende no se transgrede el principio de retroactividad de la ley, que dispone el artículo 14 Constitucional.
- Que la accionante manifestó, que el nueve de mayo de dos mil diecinueve, fue recibido ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, su escrito donde solicitó la pensión por jubilación, petición que fue atendida el seis de agosto de dos mil diecinueve, a través del oficio [REDACTED], signado por la Dirección de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través del cual se le negó la pensión solicitada, inconforme con dicha determinación, el catorce de abril de dos mil veintiuno, dirigió de nuevo escrito al citado instituto, para que previo análisis reconsiderara su caso, y se le otorgara la pensión que le corresponde, petición que no se le dio respuesta, sino hasta el treinta de julio de dos mil veintiuno, previo interposición del juicio de garantía número 594/2021, el multicitado instituto dio respuesta mediante oficio número [REDACTED], sin embargo, la autoridad demandada, confirmó a la parte actora que no reunía los requisitos de aportaciones y edad mínimos para obtener la pensión por jubilación que pretende.
- Asimismo, del oficio [REDACTED], señaló que: la autoridad demandada, negó la solicitud a la parte actora, en situaciones apreciadas de forma contraria a las circunstancias que fueron expuestas por la accionante, y solo se concretó a señalar que: **1.** Que no le asiste la razón, en cuanto a que tenga derecho a la jubilación conforme a los artículos 52 y 54 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; **2.** Que al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no contaba con el derecho a ninguna de las pensiones que señala la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada; **3.** Tampoco contaba con dictamen médico emitido por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que le diera derecho a una pensión por invalidez, por lo que durante la vigencia de la ley de seguridad abrogada, no reunió los requisitos y tampoco se ubicó en los supuestos que daban derecho a una pensión; **4.** Declaró inoportuna su solicitud; **5.** Que los derechos adquiridos se salvaguardan en el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, mismo que establece que a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, los asegurados con derechos adquiridos al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, y que estuvieran en condiciones de firmar la solicitud de permanencia en el régimen de la ley del Instituto

de Seguridad Social abrogada, o de transición al régimen de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, gozaran de los beneficios adicionales de transición.

- Además, que la negativa de otorgar la pensión por jubilación era contradictoria con lo informado por el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco mediante el oficio [REDACTED], donde sostuvo que la parte actora no cumplía con los requisitos que condicionaba la abrogada ley de seguridad social para obtener una pensión, sin embargo, ello no guardaba congruencia con la cédula de historial de cotización que adjuntó al citado oficio, pues sólo se limitó a justificar sus planteamientos respecto de los años cotizados, contenidos en el informe que rindió el Director de Prestaciones Socioeconómicas del citado instituto, señalando que la accionante al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, contaba con veintitrés años, cinco meses de aportaciones y cincuenta años de edad, por lo que no contaba con ningún derecho adquirido otorgado por la ley de seguridad abrogada de conformidad con los artículos 52 y 53 de la precitada ley.
- Sostuvo que era infundado el argumento de la autoridad demandada, pues de la hoja de cotización, se desprendió que la actora había cumplido un total de veintiséis años, once meses y quince días cotizados al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; si bien es cierto, al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, la accionante contaba con veintitrés años, cinco meses cotizados, también lo es, que la misma continuó en el servicio activo del uno de enero de dos mil dieciséis, al treinta de diciembre de dos mil dieciocho, logrando aumentar tres años más, y del uno de octubre de dos mil veinte al quince de abril de dos mil veintiuno, seis meses y quince días, por lo tanto, la enjuiciada debió contemplar los años que la promovente siguió laborando, pues al momento de perder la vigencia la ley abrogada, ella había contribuido más de quince años, por lo que podía haber alcanzado una pensión por vejez, o continuar laborando hasta alcanzar los veinticinco años o más, tal como lo hizo, luego entonces, cumplió con los requisitos que señala la Ley de la materia.
- Determinando, que los años cotizados en el periodo de la Ley abrogada, tienen que ser resguardados hasta que se cumpliera el lapso del tiempo estipulado, por lo que, si la actora siguió laborando después de cumplir veintitrés años, resultaba evidente, que logró aumentar los años, para obtener la pensión, es decir, veintiséis años, once meses y quince días, misma que rebasó la cantidad de años que exige la abrogada ley del Instituto, por eso, resultó indebido la aplicación de la autoridad enjuiciada al numeral 86 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco vigente, pues pretende aumentar más años, cuando la accionante ya cuenta con un derecho adquirido.
- También adujo que era indebido que la autoridad demandada quiera aplicarle el artículo 86 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, ya que pretende aumentar más años para la obtención de una pensión por jubilación, ya que la promovente reunió los requisitos que refiere la ley de la materia, por lo tanto, la accionante cuenta con un derecho adquirido, que no puede verse afectado por la aplicación de una norma posterior que limite o modifique en forma negativa los derechos adquiridos.
- Sosteniendo, que conforme a la interpretación que la suprema corte de Justicia de la Nación, ha hecho del artículo 14 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al tema de la Irretroactividad desfavorable que se prohíbe, definiendo como derecho adquirido, aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico, en el caso, la accionante durante el periodo laboral realizo aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, durante veinticinco años, nueve meses y tres días, con el fin de gozar de una prerrogativa establecida en la norma y constituye su consecuencia, que solo esta diferida en el tiempo y que, por ello, no puede ser tocada, modificada o desconocida por una ley posterior

- De igual manera, que por mandato constitucional, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y que al contrario, se permite la aplicación retroactiva de una ley en beneficio del gobernado, es decir, dicha irretroactividad solo estará prohibida para casos en que la aplicación se haga en perjuicio de persona alguna, y para definir dicha cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterio con sustento en la teoría de los derechos adquiridos y de la expectativa de derecho, con la cual concluyó que una ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir en perjuicio de una persona los derechos que adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, toda vez que éstos ya entraron en el patrimonio o en la esfera jurídica del gobernado, y no cuando se aplica a simples expectativas de derecho.
- En consecuencia de lo antedicho, conforme al artículo 98 fracciones II y III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, declaró ilegal la actuación del Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, así como la nulidad de la respuesta contenida en el oficio [REDACTED] de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, asimismo, condenó al Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para que, en un plazo de cinco días hábiles, dejara sin efecto el oficio [REDACTED] y procediera a realizar los trámites para el otorgamiento de la pensión a la accionante [REDACTED], que conforme a derecho le corresponde a lo dispuestos en los numerales 52 y 53 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

De lo sintetizado se puede desprender que la Sala Unitaria del conocimiento resolvió, en esencia, **declarar la nulidad** del **acto impugnado** contenido en el oficio [REDACTED], de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través del cual se negó a la promovente el derecho a recibir una pensión por jubilación; ello al estimar, esencialmente, que el accionante no acreditó haber cumplido con los requisitos previstos en el artículo 52 y 53 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, siendo que al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, fecha en que fue abrogada la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, contaba con **veintitrés años, cinco meses** de cotizar para ese instituto, y **cincuenta** años de edad, sin embargo la actora siguió laborando del **uno de enero de dos mil**

dieciséis, al quince de enero(sic)⁵ de dos mil veintiuno, en este caso, logró aumentar los años de cotización, para la obtención de pensión por jubilación, es decir, veintiséis años, once meses y quince días (cotizados), que señala la abrogada Ley del Instituto, entonces, dicha actora reunió los requisitos previsto en la norma, por lo tanto, cuenta con un derecho adquirido, lo antes descrito, fue demostrado mediante el historial de cotización de la accionante, mismo que fue ofrecido por las autoridades demandadas en el juicio principal, sobre eso, en breves momentos se abundara.

QUINTO. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- De conformidad con lo antes relatado, este Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco determina que los argumentos de agravios expuestos por la autoridad demandada, resultan **fundados y suficientes**, siendo procedente **revocar** la **sentencia definitiva** recurrida, por las consideraciones siguientes:

En principio, se estima necesario tener presente el contenido de los artículos 96 y 97 de la Ley Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente, preceptos que son de la literalidad siguiente:

“Artículo 96.- El Magistrado Unitario, al pronunciar sentencia, suplirá las deficiencias de la demanda promovida por un particular, siempre y cuando de los hechos narrados se deduzca el concepto de nulidad, sin analizar cuestiones que no fueron hechas valer y contrayéndose exclusivamente a los puntos de la litis planteada.

En materia registral, podrá revocarse la calificación del documento presentado a la Coordinación Catastral y Registral de la Secretaría de Planeación y Finanzas, cuya inscripción haya sido denegada y esta última no sea competencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, sin que pueda la Sala Unitaria, en ningún caso, resolver sobre cuestiones de titularidad, características y modalidades de derechos reales.

Artículo 97.- Las sentencias deberán contener:

- I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hubieren admitido, según el prudente arbitrio de la Sala;
- II. La fijación clara y precisa de la autoridad responsable cuando se hubiera llamado a juicio a diversas autoridades por el mismo acto;
- III. Los razonamientos lógico jurídicos, clara y sistemáticamente formulados, que sustenten la decisión final contenida en la sentencia;

⁵ De la cédula de Historial de cotización se advierte que la fecha en que la parte actora laboró es quince de abril de dos mil veintiuno (visible a foja 113 del expediente principal)

IV. Los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitarlos a los puntos cuestionados y a la solución de la litis planteada;

V. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se reconozca o cuya nulidad se declare; y

VI. Los términos en que deberá ser ejecutada la sentencia por parte de la autoridad demandada, así como el plazo correspondiente para ello, que no excederá de quince días contados a partir de que la sentencia quede firme.

[Subrayado añadido]

De los preceptos previamente transcritos se puede obtener que éstos contienen los principios procesales de **congruencia** y **exhaustividad**, a la luz de los cuales se ha establecido que el juzgador, a través de la sentencia definitiva que emita, tiene la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, ocupándose, además, exclusivamente de las personas, acciones, excepciones y defensas que hayan sido materia del juicio, esto es, planteadas por las partes.

Además, que sólo se **podrá suplir la deficiencia de la demanda** promovida por un particular, siempre que de los acontecimientos narrados se deduzca el concepto de nulidad, sin analizar cuestiones que no fueron hechas valer y contrayéndose exclusivamente a los puntos de litis planteada.

Con base en lo anterior se dice que la sentencia debe, entre otros, ser **congruente**, no sólo consigo misma, sino también con la *litis*, tal y como haya quedado entablada en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, siendo ésta, aquella característica que impone que la sentencia no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí, y, por otro lado, de congruencia externa, que en sí, atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que la sentencia no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir alguna pretensión que no se hubiera reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio.

En ese sentido, tanto doctrinalmente como en la praxis jurídica, se ha reconocido que la *litis* en un juicio debe quedar fijada por las **pretensiones** contenidas en el escrito de demanda, así como las **refutaciones** de la contestación a la misma, ello a la luz del **acto impugnado**.

Sirven de sustento a lo anterior, las tesis **sin número, 1a./J. 104/2004** y **I.6o.C.391 C**, emitidas por la entonces Cuarta y Primera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sexta y novena épocas, volumen LXXXIX, quinta parte, tomos XXI y XXIII, enero de dos mil cinco y febrero de dos mil seis, páginas 18, 186 y 1835, registros digitales 273640, 179549 y 175900, respectivamente, que son del contenido siguiente:

“LITIS, FIJACION DE LA. La controversia se fija con la demanda y la contestación, sin que sea lícito que alguna de las partes, después de ese momento procesal, deduzca pretensiones distintas de las que integraron los puntos en litigio, pues lo contrario implicaría un estado de indefensión para la contraria.”

“LITIS EN EL JUICIO NATURAL. PARA SU FIJACIÓN DEBE ATENDERSE A LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN LA DEMANDA Y LA CONTESTACIÓN Y NO A LAS ASENTADAS EN EL AUTO ADMISORIO DE AQUÉLLA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Si en el auto admisorio de la demanda no se mencionan todas las acciones hechas valer por la parte actora en el escrito relativo, el hecho de no impugnarlo no implica el consentimiento de que sólo las acciones comprendidas en ese auto serán materia de la litis, pues estimar lo contrario significaría que el Juez es quien plantea la controversia, lo cual es inadmisibles, porque la determinación de los puntos litigiosos en un proceso no corresponde al juzgador, sino a las partes. En efecto, de acuerdo con los artículos 28 y 87, así como los diversos 478 y 479 de los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Jalisco y Tlaxcala, respectivamente, el litigio u objeto del proceso se fija a partir de las pretensiones expresadas en los escritos de demanda y contestación y, en su caso, de reconvención y contestación a ésta, así como en el de desahogo de la vista que se dé con las excepciones y defensas opuestas, correspondiendo al Juez tomar en cuenta todo lo que plantean las partes para poder resolver el litigio, independientemente de que se comprenda o no en el auto que admite la demanda, para que, de esta manera, se cumpla con los principios de completitud de las sentencias, establecido por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de congruencia de las mismas, conforme a los cuales, se debe resolver sobre todo lo efectivamente planteado por las partes.”

“LITIS. CONCEPTO ESTRICTO DE ESTA INSTITUCIÓN PROCESAL EN EL DERECHO MODERNO. El concepto de litis que contienen los diccionarios no especializados en derecho lo derivan de lite, que significa pleito, litigio judicial, actuación en juicio, pero tales conceptos no satisfacen plenamente nuestras instituciones jurídicas porque no es totalmente exacto que toda litis contenga un pleito o controversia, pues se omiten situaciones procesales como el allanamiento o la confesión total de la demanda y pretensiones en que la instancia se agota sin mayores trámites procesales y se pronuncia sentencia, que sin duda será condenatoria en la extensión de lo reclamado y por ello, se puede decir válidamente que no hay litis cuando no se

plantea contradictorio alguno. Luego, se deberá entender por litis, el planteamiento formulado al órgano jurisdiccional por las partes legitimadas en el proceso para su resolución; empero, se estima necesario apuntar, que es con la contestación a la demanda cuando la litis o relación jurídico-procesal, se integra produciendo efectos fundamentales como la fijación de los sujetos en dicha relación y la fijación de las cuestiones sometidas al pronunciamiento del Juez. Lo expuesto es corroborado por Francisco Carnelutti, quien al referirse al litigio, lo define como el conflicto de intereses, calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro. Es menester señalar que la litis del proceso moderno o sea, la determinación de las cuestiones litigiosas, como uno de los efectos de la relación procesal, presenta notas características tales que, producida la contestación, el actor no puede variar su demanda, ni el demandado sus defensas, salvo algunas excepciones; por consiguiente, en términos generales, integrada la litis, las partes no pueden modificarla, y a sus límites debe ceñirse el pronunciamiento judicial. Viene al caso tratar el tema de demanda nueva y hecho nuevo, entendiéndose aquella como una pretensión distinta, relacionada con el objeto de la acción, mientras que el hecho nuevo se refiere a la causa y constituye un fundamento más de la acción deducida, por lo que cabe aclarar que la demanda nueva importa una acción distinta, mientras que el hecho nuevo, no supone un cambio de acción. Así, después de contestada la demanda, es inadmisibles una demanda nueva, pero por excepción, la ley permite que se alegue un hecho nuevo o desconocido, inclusive en la segunda instancia si es conducente al pleito que se haya ignorado antes o después del término de pruebas de la primera instancia. Tiene particular importancia saber si el actor ha variado su acción o el demandado sus defensas, o si el Juez se ha apartado en su fallo de los términos de la litis y para saberlo habrá que remitirse a las reglas establecidas para la identificación de las acciones. En efecto, hay modificación de la litis cuando varía alguno de los elementos de la acción: sujetos, objeto o causa, tanto respecto del actor como del demandado. Producida la demanda y la contestación, sobre ellas debe recaer el pronunciamiento, sin que el Juez, ni las partes puedan modificarla. En cuanto a la acusación de la rebeldía, tiene también sus consecuencias según la naturaleza del caso para la determinación de la litis. En lo que toca a los sujetos, debe destacarse que no podrá admitirse la intervención de terceros extraños a la litis; en lo que se refiere al objeto, después de contestada la demanda, el actor no puede retirarla o modificarla, ni ampliarla; por ejemplo, en los alegatos no pueden reclamarse intereses no pedidos en la demanda; tampoco puede el actor aumentar el monto de lo demandado, ni ampliarlo si en la contestación de la demanda, el demandado no objetó el monto de lo reclamado. En relación con la causa, al igual que los anteriores elementos de la acción, no puede ser cambiada, modificada o ampliada; por ejemplo, el actor que ha defendido su calidad de propietario, no puede en los alegatos aducir el carácter de usuario o usufructuario, o si el demandado ha alegado la calidad de inquilino, no puede luego fundarse la acción pretendiendo que ha quedado demostrada su calidad de subarrendatario. En este orden de ideas, los Jueces al pronunciar la sentencia que decida el juicio en lo principal, no pueden ocuparse en la sentencia de puntos o cuestiones no comprendidas en la litis. Los puntos consentidos por las partes quedan eliminados de la discusión, así como de los que desistan. Para llegar a la justa interpretación de lo controvertido, el órgano jurisdiccional está facultado para ir más allá de los términos de la demanda y de la contestación y buscar en la prueba la

exacta reconstrucción de los hechos, excluyendo sutilezas y atendiendo a la buena fe de las partes.”

[Subrayado añadido]

De lo sintetizado se puede desprender que la Sala Unitaria del conocimiento resolvió, en esencia, **declarar la nulidad** del **acto impugnado** contenido en el oficio [REDACTED], de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través del cual se negó a la promovente el derecho a recibir una pensión por jubilación; ello al estimar, esencialmente, que el accionante no acreditó haber cumplido con los requisitos previstos en el artículo 52 y 53 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, siendo que al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, fecha en que fue abrogada la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, contaba con **veintitrés años, cinco meses** de cotizar para ese instituto, y **cincuenta** años de edad, sin embargo la actora siguió laborando del **uno de enero de dos mil dieciséis, al quince de abril de dos mil veintiuno**, en este caso, logró aumentar los años de cotización, para la obtención de pensión por jubilación, es decir, veintiséis años, once meses y quince días (cotizados), que señala la abrogada Ley del Instituto, entonces, dicha actora reunió los requisitos previsto en la norma, por lo tanto, cuenta con un derecho adquirido, lo antes descrito, fue demostrado mediante el historial de cotización de la accionante, mismo que fue ofrecido por las autoridades demandadas en el juicio principal, sobre eso, en breves momentos se abundara.

En ese orden de ideas, se tiene que del análisis **integral** de la demanda, la parte actora impugnó, en esencia, el oficio [REDACTED] de fecha **treinta de julio de dos mil veintiuno**, emitido por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través del cual se **le informó que no contaba con los requisitos para recibir una pensión por jubilación**, al aducir, esencialmente, que contrario a lo sostenido por la autoridad demandada, sí cumple con los requisitos legales para obtener la referida pensión por jubilación.

De ahí, que sus **pretensiones** consistían medularmente, que la Sala del conocimiento declarara la nulidad del oficio referido, así como se reconociera que tenía derecho al otorgamiento de pensión jubilatoria, pues cumplía con los requisitos necesarios para ser otorgada, teniendo en

cuenta, que contaba con veintiséis años y cinco meses aportando al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

Por ello, para acreditar sus pretensiones la actora [REDACTED], [REDACTED], ofreció como pruebas de su parte, el oficio número [REDACTED], de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, escrito de trece de abril de dos mil veintiuno, dirigido al Director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, oficio número [REDACTED], de fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, resolución emitida en el juicio de amparo indirecto 594/2021-IV, oficio número [REDACTED] de quince de diciembre de dos mil dieciséis, solicitud de permanencia del régimen de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada o de transición al Régimen de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, solicitudes vía correos electrónicos dirigidos al Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, oficio [REDACTED] de fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, acta de nacimiento a nombre de la promovente, credencial del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco a nombre de la actora, recibos de nómina de dieciséis al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, CURP con número de clave [REDACTED], inscripción al RFC a nombre de la actora, credencial para votar a nombre de la actora, cedula de historial de cotización con número de folio [REDACTED], solicitud de pensión por jubilación, expedida por la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco a nombre de la accionante, solicitud de pensión por jubilación expedida por la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco oficio [REDACTED], instrumental pública de actuaciones; y presuncional legal y humana -folio 29 al 33 del expediente principal-.

Así, admitida en sus términos la demanda y las pruebas ofrecidas por la parte actora, se tiene que mediante oficio presentado el catorce de diciembre de dos mil veintiuno -folio 91 del expediente principal-, las autoridades enjuiciadas formularon su **contestación a la demanda**, haciendo valer la incompetencia de este tribunal para conocer y resolver el juicio de trato, además oponiendo las excepciones y defensas que estimaron procedentes (*sine action agis*, falta de acción y derecho), sosteniendo la legalidad del oficio impugnado al referir que la parte actora, al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, únicamente contaba con veintitrés años cinco meses de cotización, por lo que al no tener un derecho adquirido en términos de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad

Social del Estado de Tabasco, debía ajustarse a las disposiciones de la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, siendo que conforme a ésta última norma, tampoco cumple los requisitos para tal efecto.

Finalmente, para acreditar sus excepciones y defensas, ofreció como pruebas, el memorandum [REDACTED], de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, historial de cotización de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, expedida a nombre de la ciudadana [REDACTED], consulta a persona a nombre de [REDACTED], de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, oficio [REDACTED] de tres de mayo de dos mil diecinueve, instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana –folio 109 reverso del expediente principal-.

Señalado lo anterior, es preciso indicar que la *litis* en el juicio contencioso administrativo de origen, se constriñó en analizar la legalidad del **oficio** [REDACTED] de fecha **treinta de julio de dos mil veintiuno**, emitido por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través del cual se negó a la promovente el derecho a recibir una pensión por jubilación; ello al estimar, esencialmente, que el accionante no acreditó haber cumplido con los requisitos previstos en el artículo 52 y 53 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, siendo que al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, fecha en que fue abrogada la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, contaba con **veintitrés años, cinco meses** de cotizar para ese instituto, y **cincuenta** años de edad, sin embargo la actora siguió laborando del uno de enero de dos mil dieciséis, al quince de abril de dos mil veintiuno, en este caso, logró aumentar los años de cotización, para la obtención de pensión por jubilación, es decir, veintiséis años, once meses y quince días, lo antes descrito fue demostrado mediante el historial de cotización del accionante, mismo que fue ofrecido por la autoridad demandada en el juicio principal.

Se estiman en su conjunto, **fundados** y **suficientes** los argumentos de agravio expuestos por la parte autoridad demandada, donde aducen que les causa agravio la sentencia recurrida, pues transgrede la esfera jurídica del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, pues al dictar la misma, no analizó correctamente la apreciación e interpretación de las pruebas ofrecidas por sus representadas, por lo tanto, violenta los derechos de dicha institución.

De igual forma, que la sentencia definitiva vulnera las garantías individuales del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, esto conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, puesto que, en el fallo combatido se advierte que no fue emitida por los principios de congruencia y exhaustividad, conforme a los artículos 96 y 97 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente.

Además, que la Sala de origen no valoró correctamente la prueba marcada con el inciso **D)** del capítulo de pruebas del oficio de contestación de la demanda, consistente en el oficio [REDACTED] así como su anexo la cédula de historial de cotización de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, en virtud de que, solo se concreta a tener la prueba admitida y desahogada sin realizar el estudio correspondiente, probanza que cuenta con pleno valor probatorio, por haber sido emitido por el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, quien se encuentra investido de una serie de facultades relacionadas con las prestaciones y servicios asistenciales, incluyendo las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, además que se vincula con los hechos narrados por la actora, y al ser un documento emitido por una autoridad, se asume que es legal, por lo que, si se hubiera analizado de manera correcta por la Magistrada instructora, se hubiera percatado que a la promovente le es aplicable la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, y no la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada, pues al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no reunía los requisitos previstos en los artículos 52 y 54 de la ley abrogada, para tener derecho a una pensión por jubilación o por vejez, aunado a que en el octavo transitorio de la ley vigente, se estableció que los servidores públicos del Estado, que no contaran con los derechos adquiridos de pensión en términos de la ley anterior, se deberían ajustar a lo dispuesto por la ley vigente.

Asimismo, que la determinación de la Sala instructora carece de razón, en cuanto a que le asiste la razón a la parte actora al afirmar que tiene derechos pensionarios en términos de los artículos cuarto, sexto y noveno transitorios del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, toda vez que era la ley que se encontraba vigente cuando ingreso al servicio, de acuerdo a la cual satisfizo los requisitos para acceder a la pensión; esto es así, pues a la fecha en que la accionante ingresó al servicio público Estatal, aún no se generaban los supuestos ni las consecuencias para obtener una pensión, es decir, en esa fecha todavía no

había solicitado la pensión de retiro por edad y tiempo cotizado; sino fue hasta la presentación de la solicitud de pensión, mismo que fue el nueve de mayo de dos mil diecinueve, sin embargo, aun cuando la accionante manifieste que la ley que le resultaba aplicable para obtener su pensión es la abrogada ley de seguridad social, pues bajo su vigencia, según lo manifiesta, satisfizo los requisitos para acceder al goce de una pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, eso no implica que por ese evento haya adquirido el derecho a ser pensionada conforme a las disposiciones que regulaban en ese momento, pues si en esa época no solicitó el otorgamiento de su pensión, y por ende, tampoco le fue otorgada, es claro que solo tenía una simple expectativa de derecho de la pensión, es decir, aun no se generaba el supuesto consistente en la solicitud respectiva y menos su consecuencia, como es el otorgamiento de la misma.

Que además, es **incongruente e infundada** la interpretación de la Sala de origen, en el sentido, de que la aplicación de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco vigente, transgrede a la parte actora el principio de irretroactividad de la ley, así como que desde su ingreso al servicio público, adquirió un derecho de pensión y éste entro a su patrimonio, por lo que cita las siguientes tesis: “RETROACTIVIDAD DE LA LEY, CÓMO DEBE ENTENDERSE LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL; RETROACTIVIDAD DE LA LEY, ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA. Bajo este razonamiento la ley abrogada resulta aplicable a hechos sucedidos con posterioridad a su abrogación, dado que esta consiste en dejar sin efecto un ordenamiento legal, no resultaría lógico que se pudiera regular los hechos posteriores a la extinción de la vigencia, por lo que resulta improcedente el caso concreto la aplicación de la Ley abrogada.

Igualmente, que el derecho fundamental de irretroactividad solo puede ser vulnerado en relación a los derechos adquiridos y no respecto a las expectativas de derecho, mismo que son incongruentes e infundados los argumentos de las responsables, pues se retoma que conforme a la teoría de norma, puede considerarse una disposición legal que infrinja los principios de irretroactividad y seguridad jurídica en los preceptos legales 14 y 16 constitucionales, además de que no reunía los requisitos de edad y tiempo de cotización, y por ende, no cuenta con un derecho de adquirido, si no únicamente con una expectativa de derecho.

Además, que no resulta improcedente la aplicación de la ley para la procedencia de la pensión, puesto que al no acreditar la existencia de un

beneficio en materia de pensión por la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (vigente) a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, esta norma jurídica para poder determinar la procedencia del beneficio solicitado por la accionante, mediante la solicitud de fecha uno de julio de dos mil veintiuno(sic), el ultimo ingreso al servicio público fue en el año dos mil dieciséis(sic), de acuerdo a lo anterior no se actualiza la infracción, conforme al artículo 54 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (abrogada), ya que insiste que no se vulnera los principios previstos en la norma abrogada, si no con posterioridad.

Que en todo caso, resulta legal la emisión del oficio número [REDACTED], signado por el cual el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, dio respuesta a la parte actora a su solicitud de pensión por vejez(sic), determinando que la misma resultaba improcedente. Lo anterior, pues el derecho para obtener una pensión constituye únicamente una expectativa de derecho, hasta el momento en que se satisfagan los requisitos enunciados por la ley, y reitera, la actora al momento de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, el uno de enero de dos mil dieciséis, no contaba con el derecho adquirido de recibir la pensión que solicitó, pues aún tenía que reunir los requisitos de ley, aunque, al respecto la instructora señale que las normas deben interpretarse a la luz del principio *pro persona*, por encontrarse de por medio el derecho humano a la seguridad social de la promovente, pues se debe tener en cuenta que dicho principio no versa en que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera *so pretexto* de establecer la interpretación más extensiva o amplia que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de “derechos” alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, por tanto, el principio de que se trata no es suficiente para resolver de acuerdo a las pretensiones de la actora.

Además, que se transgrede el artículo 58 último párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (abrogada), ya que impone la obligación de probar sus acciones, pretensiones, hechos, excepciones o defensas a las partes del presente juicio, a su vez no suplirá la deficiencia de la queja en torno a la carga de probar su dicho, siendo que es arbitraria y parcial la sentencia recurrida, al manifestar que existe una deficiencia en los razonamientos o conceptos de nulidad por la parte

demandante, de acuerdo a lo anterior, se varió la *litis* teniendo en si la suplencia de la queja en favor de la actora.

Finalmente, que se varió la *litis* planteada por la actora, pues ésta no solicitó el beneficio de la pensión conforme al artículo 52 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (abrogada), introduciendo de manera arbitraria otra cuestión a la controversia planteada por las partes, toda vez que, condenando a las autoridades a algo que no fue materia de *litis*, tal y como lo prevé el precepto 97 fracción V de la Ley de la materia, por ello, solicita se revoque o modifique la resolución recurrida de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés y en su lugar, se dicte una donde se fije la *litis* y sea conforme a derecho.

Para dar claridad a lo anterior, es preciso reiterar que a través de la sentencia combatida, la Sala del conocimiento resolvió, en esencia, **declarar la nulidad del acto impugnado** contenido en el oficio [REDACTED], de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través del cual se negó a la promovente el derecho a recibir una pensión por jubilación; ello al estimar, esencialmente, que el accionante no acreditó haber cumplido con los requisitos previstos en el artículo 52 y 53 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, siendo que al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, fecha en que fue abrogada la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, contaba con **veintitrés años, cinco meses** de cotizar para ese instituto, y **cincuenta** años de edad, sin embargo la actora siguió laborando del **uno de enero de dos mil dieciséis, al quince de abril de dos mil veintiuno**, en este caso, logró aumentar los años de cotización, para la obtención de pensión por jubilación, es decir, veintiséis años, once meses y quince días (cotizados), que señala la abrogada Ley del Instituto, entonces, dicha actora reunió los requisitos previsto en la norma, por lo tanto, cuenta con un derecho adquirido, lo antes descrito, fue demostrado mediante el historial de cotización de la accionante, mismo que fue ofrecido por las autoridades demandadas en el juicio principal, sobre eso, en breves momentos se abundará.

Señalado lo anterior, a manera de preámbulo, es necesario precisar que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se modificó, entre otros, el artículo 1 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁶, que reconoce a todas las personas el goce de los derechos humanos previstos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y establece que las normas relativas a esos derechos deberán interpretarse "conforme" con tales ordenamientos y aplicando el principio pro persona, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pues al efecto disponen que todas las autoridades del Estado Mexicano, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Ahora bien, es preciso indicar que el acceso a la seguridad social constituye un derecho humano que a su vez se integra por otros subderechos tales como pensiones y jubilaciones, seguros de invalidez y vida, acceso a vivienda, entre otros, siendo que al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dispone que la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.

Por otro lado, la seguridad social fue reconocida un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, que dispone en el artículo 22 que "toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social", y en el párrafo 1 del numeral 25, se establece a favor de toda persona el "derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".

⁶ **Artículo 1o.** En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

Posteriormente, este derecho fue reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual, en su artículo 9, establece que "los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social".

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Organización de las Naciones Unidas, emitió la Observación General número 197; donde estableció que el derecho a la seguridad social es fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto. Asimismo, señaló que la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de lograr protección, en particular contra: la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; gastos excesivos de atención de salud; apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo.

Ante ello, los Estados Partes deben tomar medidas efectivas y revisarlas, en caso necesario, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para garantizar el derecho de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, a la seguridad social. Así, determinó que las medidas que se utilicen para proporcionar las prestaciones de seguridad social no pueden definirse de manera restrictiva y, en todo caso, deben garantizar a toda persona un disfrute mínimo de ese derecho humano.

Finalmente, en dicho instrumento internacional, se indicó que si bien el Pacto prevé una aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que plantean los limitados recursos disponibles, también impone a los Estados Partes diversas obligaciones de efecto inmediato, tales como: garantizar el ejercicio de este derecho sin discriminación, la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la obligación de adoptar medidas para garantizar el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, alimentación, vestido y vivienda, así como al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

⁷ Documento que se invoca como **hecho notorio** y que es consultable en el siguiente enlace:

<http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmIBEDzFEovLCuW1a0Sza b0oXTdlmnsJZZVQdrCvvLm0yy7YCiVA9YY61ZiSUILHBBI7soy3RcV7r9F7zXZ1ZFNfAN5NXNL0J8 rmy22Ati5yNNL % 2BZFPVJU2rvf>

Determinando también que las medidas deliberadamente regresivas están prohibidas, y de adoptarse, corresponderá al Estado Parte la carga de la prueba de que se realizó un examen minucioso de todas las alternativas posibles y de que están debidamente justificadas en el contexto del pleno aprovechamiento del máximo de los recursos disponibles. Aseveró que el derecho a la seguridad social, al igual que todos los derechos humanos, impone tres tipos de obligaciones a los Estados Partes, a saber: respetar, proteger y cumplir, obligaciones últimas que son acordes a la modificación al precepto 1° constitucional antes mencionado.

Bajo ese orden de ideas, es preciso indicarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión **229/20088**⁹, estableció que el derecho a la seguridad social está reconocido en los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9, 10.2 y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Humanos; XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 9 del Protocolo de "San Salvador en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales" y el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, y que dichos instrumentos establecen niveles mínimos de protección en cada una de las ramas de seguridad que prevén, que además, en el rubro de "pensiones" se considera un pago periódico que cubre la contingencia consistente en la supervivencia más allá de la edad prescrita, que en ningún caso podrá ser mayor a sesenta y cinco años.

En la misma ejecutoria, el Pleno del máximo tribunal del país, sostuvo que la **irretroactividad** de la ley es el principio de derecho, según el cual las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben ser aplicadas a los hechos que se realizaron antes de la entrada en vigor de dichas normas, el cual tiende a satisfacer uno de los fines primordiales del derecho que es el de seguridad jurídica, siendo que para solucionar los temas en los que se argumente la violación al referido principio, se han desarrollado diversas teorías, entre ellas, la **teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas de derechos**, así como la **teoría de los componentes de la norma jurídica**.

Así las cosas, respeto a la primera, se procede a hacer una aclaración de lo que debe entenderse por expectativa de derecho y derecho

⁸ Documento que se invoca como **hecho notorio** y que se encuentra visible en el siguiente enlace: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/21463>

⁹ Documento que se invoca como **hecho notorio** y que se encuentra visible en el siguiente enlace: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/21463>

adquirido en materia pensionaria, siendo que una expectativa de derecho, en general, es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente, es decir, un derecho que está en potencia en tanto que se cumpla con la condición correspondiente prevista en la propia norma, de ahí que, cuando se actualice la hipótesis contenida en tal norma, se traducirá en un derecho adquirido, lo que implicará que es hasta ese momento, que el derecho se introduce al patrimonio de una persona.

A mayor abundamiento, **la teoría de los derechos adquiridos** consiste en que cuando el acto realizado introduce un bien, facultad o un provecho al patrimonio de un individuo o a su dominio o haber jurídico, éste no se le puede privar mediante una disposición legal en contrario; lo que no acontece tratándose de las expectativas de derechos, que son aquellos derechos que se pueden llegar a obtener en el futuro con la realización de determinados actos complementarios por la ley, pero que todavía no se obtienen.

En estas condiciones, **si una ley o un acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos, sino simples expectativas de derecho, no se viola el principio de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 constitucional.**

Por otro lado, la “teoría de los componentes de la norma” abordada, además, en la jurisprudencia **P./J.123/200110**, considera que

¹⁰ **“RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.** Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se

toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si se realiza el supuesto, la consecuencia debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitarlos y cumplir con éstas. No obstante, también se consideró que el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo; lo que acontece cuando éstos son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales, que para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica; y entre las que destacó la relativa a cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia establecidos en ella, caso en que ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquél supuesto o esa consecuencia, sin violar la garantía o derecho de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida.

Así las cosas, con base, entre otros, en el referido amparo en revisión **229/2008**, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió sendas tesis de jurisprudencia de carácter obligatorio para este juzgador en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo en vigor¹¹, como la **P./J. 125/2008** y **P./J. 108/2008**, que son del contenido literal siguiente:

“ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).

Conforme a las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento de comenzar a laborar y cotizar al Instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos, incluso, el artículo 48 de la ley derogada expresamente establecía que el derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en la ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. En esa virtud, si el artículo décimo transitorio, para el otorgamiento de una pensión por jubilación a partir del 1o. de enero de 2010, además de 30 años de cotización para los hombres y 28 años para las mujeres, establece como requisito 51 años de edad para los hombres y 49 para las mujeres, la que se incrementará de manera gradual hasta llegar a los 60 y 58 años respectivamente, en el año 2026, aumento que también se

haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.”

¹¹ **“Artículo 217.** La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte.”

refleja para la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios de 56 a 60 años y para la de cesantía en edad avanzada de 61 a 65 años, igualmente de manera gradual, lo que implica que en relación con el sistema pensionario anterior los trabajadores deben laborar más años; ello no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley actual, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo.”¹²

“ISSSTE. LA LEY RELATIVA EN CUANTO ESTABLECE UN NUEVO RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL SUSTANCIALMENTE DIVERSO AL REGULADO EN LA LEY DE 1983, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). El nuevo régimen de seguridad social que prevé el citado ordenamiento legal en su integridad, por sí, no puede estimarse retroactivo en virtud de que rige hacia el futuro, es decir, a partir de que entró en vigor la ley reclamada. Por otra parte, por cuanto se refiere a los trabajadores que empiecen a cotizar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con posterioridad al primero de abril de dos mil siete, es evidente que no puede estimarse que adquirieron algún derecho al amparo de la ley derogada y, por ende, la nueva ley en nada les afecta. Tratándose de los jubilados o pensionados con anterioridad a la fecha en comento y sus familiares derechohabientes, la ley reclamada no afecta los derechos que adquirieron durante la vigencia de la ley anterior, ya que en su artículo décimo octavo transitorio expresamente señala que éstos continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones precisados en las disposiciones vigentes en la época que se pensionaron; y en relación con los trabajadores que a la entrada en vigor de la ley reclamada se encontraran cotizando al Instituto, el artículo quinto transitorio establece que podrán elegir entre mantenerse en el sistema de pensiones previsto en la ley de 1983 con ciertas modificaciones que se implementarán gradualmente, o bien, en migrar al nuevo sistema de "cuentas individuales" mediante la entrega de un bono de reconocimiento de beneficios pensionarios, sin que obste a lo anterior el hecho de que los artículos primero y segundo transitorios establezcan que la ley de 1983 quedará abrogada cuando la nueva entre en vigor, puesto que, si el artículo décimo octavo transitorio precisa que quienes se hayan jubilado o pensionado con anterioridad a su entrada en vigor continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones señaladas en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento, y en el artículo décimo transitorio se establecen modalidades al anterior sistema de pensiones que se implementarán gradualmente, es evidente que el ordenamiento legal citado en primer término en realidad se derogó parcialmente.”¹³

En tales interpretaciones jurisprudenciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que en tratándose de **derechos pensionarios**, estos no son derechos surgidos por el sólo hecho de existir la relación laboral o por simple efecto del pago de las cotizaciones, **sino que constituyen expectativas de derecho que se concretan hasta que se cumplan los requisitos para su otorgamiento**, ya que la incorporación de dichas prestaciones al patrimonio jurídico de las personas, se encuentra condicionada al cumplimiento de los

¹² Tesis de jurisprudencia **P./J. 125/2008**, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, septiembre de dos mil nueve, página 35, registro 166382.

¹³ Tesis de jurisprudencia **P./J. 108/2008**, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, septiembre de dos mil nueve, página 28, registro 166387.

requisitos previstos para tales efectos, regularmente, edad estipulada y tiempo fijado de servicio e igual de aportaciones o cotizaciones

Lo anterior, así ha sido reiterado, además, en posteriores jurisprudencias, como la número **2a./J. 33/2017 (10a.)**, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, abril de dos mil diecisiete, página 949, de rubro y texto siguientes:

“INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2002 (ACTUALMENTE ABROGADA), ES IMPROCEDENTE EN LO REFERENTE AL PAGO DE INCREMENTOS O DIFERENCIAS A LAS PENSIONES, RESPECTO DE LAS OTORGADAS ANTES DE ESA FECHA. El artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, señala que la cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México y, posteriormente, mediante reforma vigente a partir del 1 de enero de 2002, establece que se adopta para tales fines el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o bien, en proporción al aumento de los sueldos de los trabajadores en activo, según sea el referente que resulte de mayor beneficio. Ahora bien, en virtud de la fecha en que entró en vigor esa modificación legislativa, quienes se pensionaron con anterioridad a ella solamente adquirieron el derecho al incremento de sus pensiones conforme al aumento del salario mínimo aludido, por lo que no les es aplicable retroactivamente el citado precepto, habida cuenta que la jubilación no es un derecho surgido por el solo hecho de existir la relación laboral o por simple efecto del pago de las cotizaciones, sino que constituye una mera expectativa de derecho que se concreta hasta que se cumplan los requisitos para su otorgamiento, ya que la incorporación de dicha prestación al patrimonio jurídico de las personas se encuentra condicionada al cumplimiento de los años de servicio requeridos. Por tanto, mientras no exista un mandato expreso del legislador para incorporar entre los destinatarios de la norma a los pensionados con anterioridad, el parámetro que legalmente les corresponde a sus incrementos es el previsto en función del salario mínimo, el cual no puede sustituirse, vía interpretativa, por un sistema indexado o el homologado con quienes se encuentran laboralmente en activo, porque sería tanto como desconocer el principio constantemente reiterado en el sentido de que las pensiones se rigen por la ley vigente al momento de otorgarse, y asignar a la ley un efecto retroactivo que no tuvo en mente el autor de la reforma respectiva.”

[Énfasis añadido]

Asimismo, en la jurisprudencia **II.1o.A. J/26 (9a.)**, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, libro XI, tomo 2, agosto de mil doce, página 1313, registro 159994, que es del rubro y texto siguientes:

“PENSIÓN POR JUBILACIÓN, EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. SU OTORGAMIENTO ESTÁ SUPEDITADO A LA SOLICITUD DEL INTERESADO CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL MOMENTO EN QUE SE GENEREN LOS SUPUESTOS PREVISTOS LEGALMENTE PARA ELLO Y EL DERECHO RELATIVO. Los artículos 66 a 68, 75 a 79 y 81 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad

Social del Estado de México y Municipios prevén el trámite para el otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, el cual se caracteriza por iniciar a petición de parte, por escrito y mediante los formatos establecidos por el propio instituto, debiendo además cumplir con una serie de requisitos documentales, según el tipo de pensión solicitada, y aun cuando dicho trámite no es un requisito sustantivo, sí es una cuestión de procedibilidad que al no ser satisfecha, impide al interesado adquirir el derecho a aquélla. Por otra parte, los servidores públicos de la mencionada entidad y Municipios no adquieren el derecho a una pensión por jubilación, edad y tiempo de servicios de acuerdo a las normas vigentes en la época en que se incorporaron a la función pública, en virtud de que en ese momento todavía no se generan los supuestos requeridos (edad y la antigüedad en el servicio) y, por ende, tampoco la consecuencia (derecho a la pensión), por lo que si éstos se produjeron durante la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios vigente, ésta resulta ser la norma jurídica aplicable para resolver la solicitud relativa, sin que ello contraríe el principio de irretroactividad de la ley, dado que el trabajador sólo contaba con una expectativa de su derecho a la jubilación. Consecuentemente, el otorgamiento de una pensión como las señaladas está supeditado a la solicitud del interesado conforme a la legislación vigente al momento en que se generen los supuestos previstos legalmente para ello y el derecho relativo.”

[Subrayado añadido]

Igualmente, en criterios orientadores, como la tesis **VII-CASR-GO-45**, visible en la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, octava época, año I, número 5, diciembre dos mil dieciséis, página 267, de rubro y texto siguientes:

“PENSIÓN. EXPECTATIVA DE DERECHO Y DERECHO ADQUIRIDO.- La pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento de comenzar a laborar y cotizar al Instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos, esto es, el derecho a la pensión no nace cuando se ingresa a laborar, sino cuando se cumple con los requisitos previstos en la ley respectiva. Por tanto, si bien es cierto el trabajador inició su vida laboral cuando se encontraba vigente la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, ello solo le generó una expectativa de derecho, es decir, una esperanza o una pretensión de que se realizaría una determinada situación jurídica (obtener una pensión), sin embargo su derecho a una pensión se genera hasta que se cumple con los requisitos para obtenerla. Lo anterior se corrobora, del contenido del artículo 44 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, el cual establece que el derecho al goce de las pensiones comenzará desde el día en que el trabajador o sus familiares derechohabientes cumplan con los requisitos establecidos en esta ley para ello, lo que acredita que hasta antes de que se cumpla con los requisitos, lo que se tiene es una expectativa de derecho.”

[Subrayado añadido]

En consecuencia, se puede afirmar que la **pensión por jubilación**, conforme a la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada y a la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco vigente, constituye una prestación de seguridad social (derecho subjetivo) reconocida por el instituto, a favor de los trabajadores que cumplan, entre

otros requisitos, *con determinado tiempo de servicio y/o aportar al instituto*, siendo que se adquirirá ese derecho a ser reconocido por el instituto, hasta en tanto se cumplan con los requisitos para su otorgamiento previstos en las leyes que lo rijan, vigentes al momento en que se actualicen las condiciones contenidas en la norma, esto al tratarse, se insiste, de una expectativa de derecho.

Señalado lo anterior, de las constancias de autos se advierten como hechos relevantes que dieron lugar al acto impugnado antes referido oficio [REDACTED] de fecha **treinta de julio de dos mil veintiuno**, los siguientes:

- Con fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y uno, la actora [REDACTED], ingresó al servicio público como profesor titular B del Colegio de Bachilleres de Tabasco (folio 76 del expediente principal).
- En el año dos mil dieciséis, la parte actora solicitó su permanencia en el régimen de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada o de transición al régimen de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. (folio 67 del expediente principal).
- En fecha treinta de diciembre de dos mil dieciocho, la promovente causó baja por jubilación (folio 73 del expediente principal).
- Con fecha **nueve de mayo de dos mil diecinueve**, la actora presentó solicitud ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, su solicitud para obtener una pensión por jubilación.
- Mediante oficio [REDACTED] de **seis de agosto de dos mil diecinueve**, suscrito por el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, informó a la parte actora que de los registros del Sistema Informático ISSET y Sistema Integral de Gestión Administrativa y Financiera SIGAF, así como de la revisión realizada a su expediente personal, se obtiene que a la fecha en que causó baja en el servicio (treinta de diciembre de dos mil dieciocho), contaba con veintiséis años cuatro meses de cotización así como 53 años de edad, por lo tanto no reunía los requisitos, para la obtención de una pensión por jubilación; declarando inoportuna su solicitud (folio 48 y 49 del expediente principal).
- Inconforme la parte actora con la determinación anterior, el catorce de abril de dos mil veintiuno, presentó escrito ante el Director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en donde solicitó se reconsiderara su caso y se le otorgara la pensión por jubilación que le corresponde (folio 42 a 47 del expediente principal).
- Dicha petición, no obtuvo respuesta, sino hasta el treinta de julio de dos mil veintiuno, previo interposición del juicio de garantía número

594/2021-IV, el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, dio respuesta mediante oficio [REDACTED], a través del cual la autoridad demandada, confirmó a la parte actora que no reunía los requisitos de aportación y edad, para que de manera conjunta hubieran general su derecho a la obtención de la pensión que pretende. **Este último oficio consiste en el acto impugnado en el juicio de origen** (folios 35 a 41 del expediente principal).

Precisado ello, se tiene que para verificar si a la actora le asiste o no el derecho subjetivo de obtener la pensión solicitada, dicho análisis debe hacerse conforme a los requisitos establecidos en la ley vigente al momento en que tales requisitos, en su caso, se actualizaron, siendo necesario para tal efecto analizar el contenido de los artículos **52 y 54 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada, en vigor hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, así como 80, 86, 87, Sexto, Octavo y Noveno Transitorio de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciséis**, preceptos algunos invocados por la parte accionante y otros más por la autoridad demandada en el acto impugnado, así como a través de su contestación, que son del contenido literal siguiente:

**LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO
DE TABASCO (ABROGADA)**

“Artículo 52.- Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos, con 30 o más años de servicio, si son hombres y 25 a más años de servicio si son mujeres, siempre que hayan contribuido normalmente a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, y continúen aportando al Instituto, en los términos de la Ley, cualquiera que sea su edad.

[...]

Artículo 54.- Tienen derecho a pensión por vejez los servidores públicos, que habiendo cumplido 55 años de edad, tengan 15 o más años de servicio, e igual tiempo de contribuir al Instituto.”

**LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
(VIGENTE)**

“Artículo 80.- La pensión máxima total que se otorgue al asegurado, no podrá ser superior a treinta y cinco veces el salario mínimo general mensual vigente en el Estado.

[...]

Artículo 86.- La pensión por jubilación se otorgará a las mujeres que al retirarse de su empleo acrediten contar con 30 o más años de servicio y a los hombres que acrediten contar con 35 o más años de servicio e igual tiempo de cotización al ISSET y una edad equivalente al 85% del indicador de esperanza de vida que para el Estado publique el Consejo Nacional de Población.

Artículo 87.- La pensión por jubilación dará derecho a una pensión equivalente al 70% del sueldo regulador y al uso del saldo de su cuenta individual para complementar dicha pensión.

[...]

SEXTO.- A los asegurados que se encuentren cotizando al ISSET(sic) a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se les reconocerán los períodos cotizados con anterioridad, así como los derechos adquiridos.

Para efectos del Artículo 6, Fracción VII, respecto de aportación extraordinaria para la afiliación de ascendientes, éste se aplicará para nuevas contrataciones.

[...]

OCTAVO.- Aquellos asegurados que no tengan derecho a pensión alguna de las amparadas por la ley abrogada, deberán de apegarse a las nuevas disposiciones de la presente Ley.

NOVENO.- A partir del día siguiente a la publicación de esta Ley en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, los asegurados del régimen de la ley abrogada que tengan derecho a pensión, tendrán seis meses para solicitar por escrito al ISSET(sic) su permanencia en el régimen o su transición al régimen establecido en esta Ley.

La solicitud al ISSET(sic) se hará a través de los Entes(sic) Públicos(sic) en los que laboren los asegurados, en los términos que se establezcan y se le hayan dado a conocer, y ésta será definitiva, irrenunciable y no podrá modificarse. El formato que se apruebe para ejercer este derecho deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Quando el asegurado no manifieste la opción que elige dentro del plazo previsto, se entenderá que opta por transitar al régimen previsto en esta Ley.”

[Énfasis añadido]

De la interpretación al primero de los preceptos transcritos, correspondiente a la abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se obtiene, como premisa, que tienen derecho a una **pensión por jubilación**, los servidores públicos que, con **treinta o más años de servicio**, si son **hombres** y **veinticinco o más años** de servicio si son **mujeres**, siempre que hayan contribuido normalmente y continúen aportando al instituto, **cualquiera que sea su edad**, esto es, se deben cubrir **dos requisitos**, a saber, si se trata de un trabajador **hombre: a) tener treinta años o más de servicio, b) igual tiempo aportado**; y si es el caso de una trabajadora **mujer: a) tener veinticinco años o más de servicio, b) igual tiempo aportado**, siendo que en ambos casos, no se requiere del cumplimiento de una edad específica.

De igual forma, la normatividad abrogada dispone que tienen derecho a una **pensión por vejez**, los servidores públicos (**hombres o mujeres**) que, habiendo cumplido **cincuenta y cinco años de edad**, tengan **quince o más**

años de servicio e igual tiempo de contribuir al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, esto es, se deben cubrir **tres requisitos**, a saber: **a)** haber cumplido con **cincuenta y cinco años de edad**, **b)** tener **quince años o más de servicio** y **c)** **igual tiempo aportado**.

Por otra parte, de la interpretación armónica a los restantes numerales de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco vigente, igualmente se desprenden, como premisas, que los asegurados que a la entrada en vigor de esa ley se encuentren cotizando ante dicho instituto, le serán reconocidos los periodos cotizados con anterioridad, así como los derechos adquiridos.

Luego, con relación a aquellos asegurados que no tengan derecho a alguna de las pensiones contempladas por la ley abrogada, se dispuso que deberán cumplir con las nuevas disposiciones establecidas en la ley vigente.

Al respecto, la normativa vigente dispone que la **pensión por jubilación** se otorgará a las **mujeres** que al retirarse de su empleo acrediten contar con **treinta o más años de servicio e igual tiempo de cotización** y a los **hombres** que acrediten contar con **treinta y cinco o más años de servicio e igual periodo de cotización**, y en ambos casos, una edad equivalente al **85% del indicador de esperanza de vida** que para el Estado publique el Consejo Nacional de Población; esto es, se deben cubrir **tres requisitos**, a saber, si se trata de un trabajador **hombre**: **a)** tener **treinta y cinco años o más de servicio**, **b)** **igual tiempo aportado**, y **c)** **85% del indicador de esperanza de vida**; y si es el caso de una trabajadora **mujer**: **a)** tener **treinta años o más de servicio**, **b)** **igual tiempo aportado** y **c)** **85% del indicador de esperanza de vida**. Además, la pensión será equivalente al 70% del sueldo regulador y al uso del saldo de su cuenta individual para complementar dicha pensión, siendo que la pensión máxima total no podrá ser superior a treinta y cinco veces el salario mínimo general mensual vigente en el Estado.

Asimismo, los asegurados del régimen de la ley abrogada que tengan derecho a pensión, tendrán **seis meses** (contados inicialmente a partir de la publicación de la Ley de Seguridad Social para el Estado de Tabasco en vigor), a fin de solicitar por escrito al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (a través del formato autorizado), su permanencia en ese régimen o su transición al régimen establecido en la nueva ley, siendo que cuando el asegurado no manifieste la opción que elige dentro del plazo previsto, se *entenderá* que opta por transitar al régimen previsto en la nueva ley.

Con base en lo anterior, como se anticipó, los argumentos de agravio expuestos son **fundados y suficientes**.

Ello es así, pues en el caso se estima desacertada la determinación de la Sala *a quo*, porque justo como lo sostiene la autoridad recurrente, en la especie se está frente a una simple expectativa de derecho, y no así frente a un derecho adquirido por parte de la accionante, debido a que de conformidad con las constancias que obran en el expediente y que han sido previamente analizadas, las cuales hacen prueba suficiente en términos del artículo 68 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco¹⁴, se puede advertir que la Ciudadana Claudia Elena Vázquez Beltrán, cuando todavía se encontraban vigentes los **artículos 52 y 54 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada**, no satisfizo plenamente los requisitos legales para obtener la pensión por jubilación ni aun así la **de vejez**, ya que al día treinta y uno de diciembre de dos mil quince, contaba con veintitrés años cinco meses de cotización, así como con una edad de cincuenta años.

Pues, independientemente la Sala resolutora en la sentencia combatida, sostuviera que al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, la actora [REDACTED], tenía cumplidos veintitrés años cinco meses de aportaciones al Instituto de Seguridad Social, y al continuar laborando del uno de enero de dos mil dieciséis al quince de abril de dos mil veintiuno, logró aumentar los años de cotización para tener derecho a obtener una pensión por jubilación, cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 52 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, lo cierto es, que el promovente no satisfizo los requisitos para ser beneficiario de un derecho pensionario conforme a las disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (abrogada), teniendo en cuenta, que el mismo en ese momento **no contaba con un derecho adquirido, sino con una mera expectativa de derecho**, ya que a ese instante (treinta y uno de

¹⁴ “**Artículo 68.-** La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones:

I. Harán prueba plena, la confesión expresa de las partes, la inspección ocular, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridades en documentos públicos, pero si en estos últimos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado;

II. Las documentales públicas y la inspección judicial siempre harán prueba plena;

III. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se entenderán como legalmente afirmados los hechos que consten en las actas respectivas; y

IV. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como de las demás pruebas, quedará a la prudente apreciación del Magistrado Unitario.

Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la autoridad jurisdiccional adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia.”

diciembre de dos mil quince), no cumplía con **todos** los requisitos para su otorgamiento, conforme a esa normatividad entonces vigente.

Por tanto, como previamente se detalló no es suficiente el tener una expectativa de derecho, si no por el contrario, obligatoriamente tendrá que cumplirse con los requisitos previstos en la Ley, para la obtención de una pensión -por jubilación o de vejez- de ahí, lo inexacto de la Magistrada resolutora, pues las argumentaciones y apreciaciones consideradas en la sentencia combatida, no son suficientes y eficaces para comprobar el hecho constitutivo de la pretensión del actor para que constatar la existencia del derecho adquirido, y como tal, fijar una condena al respecto.

Lo anterior es así, porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo reconocerá el derecho subjetivo del actor a partir de los datos (hechos precisos, pormenores de las pretensiones y pruebas) que éste allegue al proceso, que sean suficientes para acreditar que cuenta con el derecho para que se le otorgue lo pedido en la instancia de origen.

En ese sentido, no es posible desconocer por este Pleno que con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco (que entró en vigor el día uno de enero de dos mil dieciséis, conforme a su artículo Primero Transitorio), en la cual el legislador local, en uso de sus facultades constitucionales, dispuso en su artículo Sexto Transitorio que aquellos asegurados que no tuvieran derecho a alguna de las pensiones contempladas por la ley abrogada, deberán cumplir con las nuevas disposiciones establecidas en la ley vigente.

Siendo que en su artículo 86, como se indicó, establece a manera de requisitos para obtener una **pensión por jubilación**, el 85% de la esperanza de vida en la entidad, así como treinta años o más de servicio y de cotización en el caso de las **mujeres** y treinta y cinco años de servicio y de cotización para el caso de los hombres.

De ahí que haya sido ilegal la sentencia combatida por medio de la cual se reconoció la **invalidez del acto impugnado**, pues la autoridad enjuiciada de forma acertada sostiene que a la actora le es aplicable la Ley de Seguridad Social del estado de Tabasco (vigente), y que conforme a esta norma, a la fecha de solicitud, no reunía los requisitos ahí dispuestos, pues únicamente cuenta con con veintitrés años cinco meses de cotización de cotización, así como **cincuenta años** de edad; cuando se insiste, la norma dispone treinta años de

cotización y de servicio, así como el 85% del indicador de esperanza de vida para la entidad¹⁵, que en ese año (dos mil diecinueve) fue de 74.9, siendo que el 85% equivale a por lo menos sesenta y tres años.

Reiterando, que aun cuando no se desconoce que la actora fue inscrito en el sistema de seguridad social durante la vigencia de la ahora abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, lo cierto es que como se ha dicho, en estricto acatamiento a las diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este tribunal, el otorgamiento de una pensión constituye una expectativa de derecho, en tanto está condicionada a la satisfacción de ciertos requisitos como lo son la edad y la antigüedad en el servicio y, por ende, es inconcuso que el derecho a la pensión no nace cuando se ingresa a laborar, sino una vez se cumplen los requisitos previstos en la ley respectiva, de ahí que **no pueda estimarse que se trata de un derecho en vías de ejecución el cual se debió resguardar por la autoridad administrativa**, y menos aún que exista aplicación retroactiva a la norma legal en su perjuicio, pues ello no acontece respecto de expectativas de derecho -sino únicamente en torno a derechos adquiridos-, lo cual no se actualiza en la especie.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis **2511** emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sexta época, tomo I, página 1745, registro 903184, de rubro y texto siguientes:

“RETROACTIVIDAD, TEORIAS DE LA. Sobre la materia de irretroactividad, existen diversidad de teorías, siendo las más frecuentes, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas o situaciones abstractas y situaciones concretas, siendo

¹⁵ Indicadores de esperanza de vida por año, emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se invocan como **hecho notorio** y que son consultables en la página de internet siguiente:

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Mortalidad_Mortalidad_09_61312f04-e039-4659-8095-0ce2cd284415

The screenshot shows the INEGI website interface for an interactive data tool. The title is "Esperanza de vida al nacimiento por entidad federativa según sexo, serie anual de 2010 a 2022". The interface includes a search bar, a navigation menu with "Temas", "Programas de información", "Sistemas de Consulta", "Infraestructura", and "Acercas del INEGI", and a search button labeled "Buscar...". Below the title, there are options to "Seleccionar variables" and "Ordenar variables". The selected variables are "Entidad federativa" (1 de 33), "Periodo" (7 de 13), and "Sexo" (1 de 3). A "Consultar" button is visible. At the bottom, a table displays the data for Tabasco:

Entidad federativa	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total						
Tabasco	74.7	74.7	74.8	74.9	75.1	75.2	75.3

la primera, el mandamiento de la ley, sin aplicación concreta de la misma. **El derecho adquirido** es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; y la **expectativa de derecho** es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio; en el segundo, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte, como puede verse en las páginas 226 y 227 del Apéndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Federación, al establecer: "Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial". "La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos". "Al celebrarse un contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye".

[Énfasis añadido]

Así como también, la tesis **2a. LXXXVIII/2001**, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, junio de dos mil uno, página 306, registro 189448, que es del rubro y texto siguiente:

“IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, **el derecho adquirido** es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, **la expectativa de derecho** es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado.”

[Énfasis añadido]

De lo anterior que resulten **fundadas** las manifestaciones de la autoridad demandada en las que señalan que es procedente aplicar las disposiciones de la nueva Ley de Seguridad Social del estado de Tabasco (vigente), pues si bien, como se explicó previamente, conforme al artículo 1

constitucional, todas las autoridades del Estado Mexicano, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, interpretando las normas y favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Siendo que conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene a los tratados parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes generales de la Unión, de manera que se hará un control de convencionalidad *ex officio* en materia de derechos humanos que consiste en realizar una interpretación del orden jurídico conforme a los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

Luego, para el ejercicio del control *ex officio*, el órgano jurisdiccional debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de realizar ese tipo de control, es decir, en cada caso determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto, o una *inaplicación*, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos.

Lo cierto es que en el caso, aun cuando no se puede desconocer que el legislador impuso mayores requisitos para obtener el derecho pensionario que solicita la actora, dado que la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento en que empiezan a laborar y a cotizar al instituto, pues su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de los requisitos respectivos; es el caso que no se considera que la aplicación de las disposiciones de la Ley de Seguridad Social para el Estado de Tabasco vigente mediante el acto impugnado, sea violatorio de sus derechos humanos y que por ende, deban inaplicarse dichas disposiciones, debido a que el incremento de la edad mínima y tiempo de cotización a fin de tener derecho a una pensión de jubilación o de vejez, **no afecta derechos adquiridos ni se puede estimar regresiva**, pues a través de la normatividad vigente, se sigue garantizando el derecho a la seguridad social de los trabajadores del Estado, en su modalidad pensionaria, aun cuando ello implique cubrir mayores requisitos para su otorgamiento, lo cual se insiste, se realizó bajo la libertad configurativa del legislador, pues no debe soslayarse que los derechos no son absolutos, por tanto, pueden ser objeto

de modalidades y restricciones, siempre y cuando no se afecte la seguridad jurídica de los particulares, lo cual no ocurre con simples expectativas de derechos, como en el caso.

Máxime que en el caso, se insiste, no se modificaron o alteraron derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos, sino simples expectativas de derecho, además de que a consideración de este juzgador, tal norma no resulta evidentemente sospechosa o contraria a los parámetros de control de los derechos humanos, dado que de conformidad con los instrumentos internacionales analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión **229/2008**, se acata el nivel mínimo del derecho pensionario, al considerarse un pago periódico que cubre la contingencia consistente en la supervivencia más allá de la edad prescrita, que en ningún caso podrá ser mayor a sesenta y cinco años, siendo que en el caso, como se expuso, el requisito requerido para la actora corresponde a la edad de sesenta y tres años, de ahí que no se estime actualizada la violación a su derecho humano a la previsión social.

Sirve de sustento a la determinación anterior, por *analogía*, la tesis de jurisprudencia **2a./J. 16/2014 (10a.)**, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 5, abril de dos mil catorce, tomo I, página 984, registro 2006186, que es del contenido siguiente:

“CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconventionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad

y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconventionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado.”

[Subrayado añadido]

Sin que con la determinación anterior, este Pleno de la Sala Superior contravenga el principio *pro homine* o *pro persona*, previsto en el artículo 1, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de la forma que favorezca más ampliamente a las personas; pues si bien se reitera que la pretensión de la actora ciudadana [REDACTED], es obtener la pensión por jubilación, lo cierto es que para ello este órgano revisor se encuentra obligado a verificar que se cumplan los supuestos legales para el reconocimiento de tal derecho subjetivo, lo que en el caso, se insiste, no aconteció.

Lo anterior es así, pues la aplicación del principio *pro homine* o *pro persona*, no llega al extremo de violentar el principio de equidad procesal o desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad de las acciones, que son propios de una impartición de justicia completa y expedita, que debe regir todo juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sirven de sustento a lo anterior, las tesis de jurisprudencia **2a./J. 98/2014 (10a.)** y **2a./J.56/2014**, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, tomos I y II, octubre y mayo de dos mil catorce, registros 2007621 y 2006485, páginas 909 y 772, respectivamente, que son del rubro y contenido siguiente:

“DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio.”

“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio *pro persona* o *pro homine*-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones

que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.

[Énfasis añadido]

También tiene aplicación a lo anterior, la tesis **III.4o.T.2K (10ª)**, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, tomo IV, enero de dos mil catorce, registro 2005342, página 3072, que es del rubro y contenido siguiente:

“INCONFORMIDAD. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA EJECUTORIA DE AMPARO SU PRESENTACIÓN SE SUJETA A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA, POR LO QUE SI EL INCONFORME INCUMPLE CON EL PRESUPUESTO PROCESAL DE SU OPORTUNIDAD, NO PUEDE NI DEBE SER MOTIVO DE ANÁLISIS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuando la parte interesada no estuviere conforme con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, a petición suya se enviará el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución, de otro modo, ésta se tendrá por consentida. De ello se infiere que la inconformidad debe presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución correspondiente pues, de no ser así se tendrá por consentida y el Tribunal Colegiado de Circuito estará impedido para analizarla de fondo, por actualizarse la extemporaneidad o inoportunidad de su presentación; sin que al efecto pueda alegarse que el órgano revisor se encuentre compelido a examinar dicho recurso presentado fuera de tiempo, bajo el argumento de que debe cederse ante la preeminencia que adquiere el efecto reparador de la sentencia tutelar de derechos fundamentales, ni tampoco por la aseveración de que al tratarse de una cuestión de orden público y a la luz del principio pro homine y la interpretación conforme, el tribunal deba entrar a su estudio, toda vez que la inconformidad no puede ni debe ser motivo de análisis por el órgano jurisdiccional colegiado, si el inconforme no cumple con el presupuesto procesal de la oportunidad, esto es así, en razón de que la aplicación del citado principio y de la interpretación conforme, **no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, que son propios de una eficaz y expedita administración de justicia de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, además, sirven de base para una efectiva protección de los derechos de las personas, ya que no respetar los presupuestos procesales implicaría la existencia de una inseguridad jurídica para las partes,** al no respetarse los plazos establecidos por el legislador.”

[Énfasis añadido]

En las relacionadas condiciones, se advierten agravios suficientes por la recurrente, para revocar la sentencia que se revisa, al establecerse de manera lógico-jurídica la lesión o agravios que estima le causa la resolución recurrida y los motivos que originaron esos agravios, pues los

mismos van encaminados a desvirtuar un derecho adquirido que en la especie no aconteció, máxime que la Magistrada de manera infundada y motivada emitió la sentencia que se revisa, declarando la nulidad del acto impugnado, tal y como anteriormente quedo precisado, por tanto, al haber resultado **fundados** y **suficientes**, lo procedente es **revocar la sentencia definitiva** de fecha **quince de marzo de dos mil veintitrés**, dictada por la **Primera Sala Unitaria** de este Tribunal, en el expediente **381/2021-S-1**.

Motivo por el cual, atendiendo el artículo 17¹⁶ Constitucional que prevé el derecho al acceso a la impartición de justicia y a una tutela judicial efectiva, al establecer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, así como también por economía procesal, **se reconoce la validez del acto impugnado**, consistente en el oficio **[REDACTED]** de fecha **treinta de julio de dos mil veintiuno**, emitido por el **Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco**, a través del cual se negó al promovente el derecho a recibir **una pensión por jubilación**; por no haber cumplido con los requisitos previstos en el artículo 52 y 53 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se sustenta lo anterior, **de conformidad al artículo 100¹⁷ fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco Vigente**.

Es de señalarse que el criterio anterior ya fue sostenido en la sentencia dictada en los tocas de apelación **AP-003/2022-P-3, AP-106/2022-P-1, AP-100/2022-P-3, AP-029/2023-P-2** las cuales fueron aprobadas por unanimidad de votos por los Magistrados que integran el Pleno de esta Sala Superior, **en las sesiones celebradas los días veintiuno de octubre de dos mil veintidós, veintiséis de mayo, dos de junio, ocho de septiembre de dos mil veintitrés, respectivamente**.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 108, 109, 111 y 171, fracción XXII, de la Ley Justicia Administrativa del Estado

¹⁶ “**Artículo 17.** Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. (...) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

¹⁷ “**Artículo 100.** La sentencia definitiva podrá:

I.- Reconocer la Validez del acto impugnado

[...]

de Tabasco, publicada el quince de julio de dos mil diecisiete, en el Suplemento B al Periódico Oficial del Estado, número 7811, es de resolverse y se:

RESUELVE

PRIMERO. Este Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco resulto **competente** para conocer y resolver el presente recurso de apelación.

SEGUNDO. Resultó **procedente** el recurso de apelación propuesto.

TERCERO. Son **fundados y suficientes** los agravios planteados por la autoridad demandada en consecuencia;

CUARTO. Se **revoca** la **sentencia definitiva** de fecha **quince de marzo de dos mil veintitrés**, emitida por la **Primera** Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en el expediente número **381/2021-S-1**, conforme a lo expuesto en la presente resolución.

QUINTO.- Por economía procesal, **se reconoce la validez del acto impugnado**, consistente en el oficio [REDACTED] de fecha **treinta de julio de dos mil veintiuno**, emitido por el **Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco**, a través del cual **se negó** al promovente el derecho a recibir una **pensión por jubilación**, en vista de que la ciudadana [REDACTED], **no satisfizo** plenamente los requisitos legales para obtener la pensión por jubilación, tal cual, como lo contempla la Ley de Seguridad Social del estado de Tabasco vigente.

SEXTO.- **Una vez al quedar firme el presente fallo**, con **copia certificada** del mismo, notifíquese a la **Primera** Sala Unitaria de este tribunal y remítanse los autos del toca de apelación **AP-061/2023-P-2** y del juicio **381/2021-S-1**, para su conocimiento y, en su caso, ejecución.

Notifíquese a las partes la presente resolución de conformidad con los artículos 17 y 18, fracción XIII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado vigente. - **Cúmplase.**

ASÍ LO RESOLVIÓ EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO,

POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS **MAGISTRADOS JORGE ABDO FRANCIS** COMO PRESIDENTE, **RURICO DOMÍNGUEZ MAYO** COMO **PONENTE** Y **DENISSE JUÁREZ HERRERA**, QUIENES FIRMAN ANTE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, LICENCIADA **HELEN VIRIDIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**, QUIEN CERTIFICA Y DA FE.

DR. JORGE ABDO FRANCIS

Magistrado Presidente y titular de la Primera Ponencia.

MTRO. RURICO DOMÍNGUEZ MAYO

Magistrado Ponente y titular de la Segunda Ponencia.

M. EN D. DENISSE JUÁREZ HERRERA

Magistrada titular de la Tercera Ponencia.

LIC. HELEN VIRIDIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Secretaria General de Acuerdos.

Que las presentes firmas corresponden a la resolución del Toca del Recurso de Apelación **AP-061/2023-P-2**, misma que fue aprobada en la sesión de Pleno celebrada el once de octubre de dos mil veintitrés.

RDM'eeb.

“... De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119, 124, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 3 fracción VIII y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas; 18, de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, del Estado de Tabasco y el acuerdo TJA-CT-001/2023, del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa, se indica que fueron suprimidos del documento, datos personales de personas físicas, y personas Jurídico Colectivas, como: nombre, CURP, RFC, dirección particular, cuentas bancarias y claves bancarias, edad, teléfono particular, historial médico, estado civil, deducciones salariales y deudas, correo electrónico personal, fotografías, nacionalidad, matricula del servicio militar, pasaporte, credencial para votar, (INE); por actualizarse lo señalado en dichos supuestos normativos...”